

FRONTERAS DEL DERECHO INTERNACIONAL

Flirteo peligroso

A cinco días de las elecciones presidenciales de los EE.UU., recordamos nuestras columnas de agosto de 2018 en las que insistíamos que la política exterior colombiana debía mirar al conjunto. Colombia entre 2010 y 2018, como una de las escasas excepciones al respice polum imperante en más de un siglo, diversificó su agenda fortaleciendo las relaciones con Latinoamérica y el Caribe, revirtió el rezago y el desplazamiento que teníamos con Asia Pacífico, y su agenda exterior dejó de centrarse en la securitización para soportarse en una diplomacia económica, comercial y cultural.



ERIC TREMOLADA
Dr. En Derecho Internacional y relaciones Int.
eric.tremolada@uexternado.edu.co

Sin embargo, el Gobierno actual empezó agitando el chovinismo, primero pensando en la disputa con Nicaragua, anunció el uso de “todos” los mecanismos necesarios para defender el territorio, cuestionó el reconocimiento de Palestina como Estado y, en materia de paz, insistió en “hacerle modificaciones importantes” al Acuerdo e incluso se volvió a negar la existencia del conflicto.

Así, volvimos a un agenda securitizada, contando las hectáreas sembradas de coca y hablando de nuevo de fumigaciones aéreas, promoviendo un infructuoso cerco diplomático a Venezuela, un irrestricto apoyo a Guaidó, fricciones con Cuba, no solo porque se niega -amparada por el protocolo de ruptura- a extrañar la cúpula negociadora del ELN, sino porque fue uno de los poquísimos países que se abstuvo de votar en la ONU a favor de levantar el bloqueo económico a la isla, y como si fuera poco, ralentiza la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, pese a que sabe el enorme costo que le significa frente a la comunidad internacional. En marzo pasado, el relator especial de la ONU, Michel Forst, concluyó que Colombia sigue siendo el país de América Latina donde asesinan a más defensores de derechos humanos.

VOLVIMOS A UN AGENDA SECURITIZADA, CONTANDO LAS HECTÁREAS SEMBRADAS DE COCA

Ahora, como en 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe, rompe la obvia neutralidad política que el país debería tener frente a las elecciones de los EE.UU. y se alinea con los republicanos. El flirteo es aprovechado por el propio presidente americano, a quien la irrupción de Colombia en la campaña, le facilita asegurarse un importante sector del voto latino en Florida. Trump, como si fuera Uribe, pensando en los mismos réditos, critica el proceso de paz y descalifica a los demócratas con el apelativo de “castrochavistas”, y no se inhibe en mandarle al imputado expresidente colombiano mensajes de apoyo.

¿Será que la Cancillería colombiana no recuerda que luego de los comicios de 2008, los congresistas demócratas nos cobraron que Uribe recibió en plena campaña electoral a John McCain, y por ello ventilaron sin reparos las dudas que tenían de ese gobierno en materia de derechos humanos? El trámite del Tratado de Libre Comercio entre los dos países, solo se despejó seis años después, esto es cuando Uribe había dejado el poder.

No obstante, la apuesta en favor de McCain fue menos riesgosa y la intromisión en esa campaña menos notoria, aunque Duque no se haya manifestado el evidente y nada recatado entrometimiento de su gobierno en favor de Trump, en medio de una realidad política muy polarizada, no será olvidada por los demócratas, ni por los países latinoamericanos a los que dividió al postular -en contra de un código de conducta- como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo a Mauricio Claver-Carone, el candidato de Trump.

De todos, no de cada uno



LEOPOLDO FERGUSSON
Profesor Asociado, Facultad de Economía, Universidad de los Andes

-“Señora, en esta zona está prohibido parquear, y además está bloqueando el acceso a un garaje”, dice un observador.

-“No sea sapo. Además, esto es espacio público,” responde la infractora.

-“Precisamente, porque es público tiene que usarlo respetando unas reglas”, concluye frustrado el observador.

Ese intercambio, tan inverosímil como real en Bogotá (y otras ciudades colombianas), muestra la concepción que muchos tenemos del espacio público. No es el espacio de todos, que debemos compartir y usar acogiéndonos a ciertas reglas. Es el espacio de cada uno, del que disponemos como queramos.

El ejemplo viene al caso dadas las reacciones frente a la propuesta de cobrar por el uso del espacio público en Bogotá. Al cobro por parqueo en calle se sumó el anuncio de cobrar a comercios y a vendedores informales que ocupen el espacio público.

La idea no es nueva, como tampoco (al parecer) la resistencia en su contra. De hecho, el anterior Secretario de Movilidad duró todo el periodo anunciando el inicio del cobro por parqueo en calle en Bogotá. Una noticia de agosto de 2017 daba un primer “abc” del parqueo en calle, y preveía su inicio a fines de 2017. Otra de junio de 2018 corría la fecha para 2019. Al llegar 2019, una más hablaba de pilotos en 2019 e inició en forma en 2020. Peñalosa, que si por algo se destaca es por su capacidad de ejecución, se fue sin dejar esto montado.

CONSOLIDAMOS UNA NORMA SOCIAL EN LA QUE LAS LEYES ESTÁN PARA VIOLARLAS

La actual administración retomó esta idea con un piloto propuesto por el Secretario de Movilidad, y la extendió al cobro a comercios e informales con el anuncio de la Alcaldesa. Al Secretario le cayeron críticas desde el Concejo y las palabras de la Alcaldesa sacaron ampolla.

Como es obvio, las críticas que sean válidas sobre la estructuración de los proyectos

deben atenderse. Pero esperamos que esta resistencia no conduzca al mismo desenlace del pasado. Vale la pena defender la iniciativa pues sus ventajas son potencialmente enormes.

El status quo es que está prohibido estacionar (o vender) en casi cualquier lugar de la ciudad. Esto tan exigente es imposible de cumplir, y el equilibrio resultante es que, más bien, es tolerado parquear en cualquier lugar sin importar los letreros de “prohibido parquear en ambos costados”. Así, no sólo tenemos una ciudad caótica con carros estacionados donde no se debería, afectando el tráfico, sino que consolidamos una norma social según la cual las leyes están para violarlas. Un parqueo ordenado, permitido en zonas que lo resisten, y con cumplimiento estricto de las prohibiciones donde no, mandaría el mensaje correcto. Transmitiría la idea del imperio de la ley y su cumplimiento, un efecto que va más allá de organizar el parqueo y alivianar los problemas de movilidad. Algo similar ocurriría con el comercio.

La iniciativa también es importante para la seguridad. Algunos cuidadores de carro

La compensación del IVA



CAMILO MARTÍNEZ BELTRÁN
Socio DLA Piper Martínez Beltrán

El pasado 23 de octubre la edición escrita de The Economist registró una noticia positiva sobre Colombia que ha pasado desapercibida en términos generales, mucho más por parte de los contradictores del Gobierno, relacionada con la compensación del IVA que beneficiará a más de un millón de familias en situación de pobreza.

Colombia tiene la tercera tasa de IVA más alta de Latinoamérica, solo superada por Uruguay y Argentina. Como es ampliamente reconocido en el país, la tasa de 19% del impuesto es consecuencia directa de la cantidad de productos exentos o que gozan de una tasa preferencial. Según los datos de la Presidencia, estas excepciones y menores tasas tienen un costo equivalente a seis puntos del PIB.

La esperanza de que estas excepciones al IVA se eliminen o reduzcan por parte del Legislativo son prácticamente nulas. Los últimos cuatro gobiernos, en sus innumerables reformas tributarias, han impulsado en el Legislativo proyectos de ley que encuentran dentro de su clausulado la reducción de los productos exentos del impuesto, apoyados en razones técnicas ampliamente reconocidas a nivel mundial. Sin embargo, los esfuerzos del Ejecutivo no han

tenido éxito como consecuencia de que el Legislativo se rehúsa a ser parte de una causa altamente impopular. Tristemente nos gobierna es el populismo.

Ante la negativa del Congreso de avanzar en una causa común para reducir los productos exentos no hay alternativa distinta que grabar los productos con una alta tasa del IVA, lo que se traduce en que los sectores menos favorecidos deben gastar un mayor porcentaje de sus ingresos para el pago del impuesto.

COLOMBIA TIENE LA TERCERA TASA DE IVA MÁS ALTA DE LATINOAMÉRICA

Nada más regresivo que esto. Según el Gobierno, las familias gastan mínimo \$37.500 mensuales en el pago del IVA. Incomprensible situación que agrava aún más la brecha social que existe en el país, que nos posiciona como la nación más desigual en ingresos per cápita de las naciones que conforman la Oede.

Ante el quite que le ha hecho el Legislativo de progresar hacia un país más justo, el Gobierno Nacional destinará más de \$2 billones en la devolución del IVA, lo que represen-

ta para los hogares más necesitados un ingreso bimensual de \$75.000 con alcance en los 32 departamentos. Esta fórmula, producto colombiano, está siendo llamada a ser replicada en otros países donde ya se adelantan reformas legislativas en este sentido.

Es de aclarar que esta devolución no es un subsidio más. Se trata es de recursos que se les devuelven a las familias necesitadas que no debieron nunca salir de su dominio.

La misma Oede se pronunció así: “existe amplia evidencia empírica que demuestra que estos programas sociales utilizados para canalizar la compensación del IVA tienen efectos positivos en la equidad, la reducción de la pobreza, el logro educativo, la nutrición y otras dimensiones de la calidad de vida”.

Evidentemente, la razón llama a que en el país se eliminen de una vez por todas las exenciones al IVA y se reduzca la tasa general, pero ante esta imposibilidad hay que reconocerle al Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, el ingenio y los esfuerzos que están haciendo para lograr un país más justo, así como se lo reconoce The Economist y la Oede.